

Winter December, 2012

La política peruana y la educación superior

Jose Luis Sardon, *Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas*

COLUMNAS conversó con el actual Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) sobre algunos temas de la política peruana y la realidad universitaria.

Dr. José Luis Sardón
Decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Ciencias Aplicadas - UPC



La Política Peruana y la *Peruvian Politics and*

1. Deseamos iniciar la presente entrevista preguntándole sobre la situación actual de la política en el Perú. ¿Qué se debe hacer para volver a creer o tener confianza en los políticos?

La confianza se construye sobre la base del cumplimiento de lo ofrecido en las campañas electorales o, en todo caso, sobre la base de buenos resultados. En el Perú, el problema es el siguiente: Si los políticos cumplen lo que ofrecen en las campañas, no obtendrían buenos resultados; para obtener buenos resultados, los políticos tienen que incumplir las promesas demagógicas que hicieron en las campañas electorales. De esa manera, aunque los políticos ganan confianza por la vía de obtener buenos resultados, la pierden por la vía de incumplir lo que prometieron. ¿Cómo se puede ir a una situación en la que los políticos ganen confianza obteniendo buenos resultados, pero al mismo tiempo cumpliendo lo que ofrecieron hacer en las campañas electorales? Evidentemente, la única forma es hacer que en dichas campañas no hagan promesas demagógicas sino promesas de políticas públicas serias. Sin embargo, ellos

no harán ese tipo de promesas si es que la ciudadanía no valora las políticas públicas serias y consistentes con el desarrollo económico. Lo más importante para superar esta situación, por tanto, es educar a la ciudadanía en la comprensión del funcionamiento de la economía. Es una tarea difícil, pero no imposible.

2. Como estudioso de las ciencias políticas, ¿piensa usted que se debe hacer algún cambio al modelo político de nuestro país?

Considero que hace falta cambiar el sistema de gobierno, yendo hacia uno en el cual el Presidente no pueda disolver el Congreso, pero éste no pueda tampoco censurar nunca a los ministros. Debíamos ir, en suma, a perfeccionar un sistema de separación de poderes. Este modelo requeriría algunos ajustes adicionales, como, por ejemplo, introducir la reforma del calendario electoral, de manera tal que se tuviera una renovación parcial del Congreso a la mitad del período presidencial. Ello permitiría que el pueblo dirimiera los enfrentamientos que surjan entre el Ejecutivo y el Legislativo. Adicionalmente, debe sustituirse el actual sistema de representación

COLUMNAS interviewed with the UPC School of Law Dean about Peruvian politics and the current reality of universities in Peru.

Educación Superior

Higher Education

proporcional con el que se asignan las curules parlamentarias por uno de representación de mayorías, basado en la elección de los congresistas en circunscripciones uninominales. Esta reforma electoral facilitaría el funcionamiento de un sistema de separación de poderes, puesto que llevaría a la formación de dos grandes partidos. Al mismo tiempo, esta reforma electoral tendría un efecto de gran importancia, como es el permitir una mayor proximidad entre congresistas y ciudadanos. Esta mayor proximidad se traduciría en menos corrupción, menos gasto público y menos impuestos.

3. Respecto de los actos de violencia producto de las protestas que se han suscitado últimamente, ¿cómo se debe regular y controlar el derecho a protestar, sin que ello afecte otros derechos fundamentales como el derecho a la libertad, a la propiedad, etc.?

No existe el derecho a protestar como tal; lo que existe, en todo caso, es el derecho a la libertad de expresión, pero esa libertad no puede ejercerse afectando

la vida, la libertad y la propiedad de otras personas. El gobierno no debería permitir que ello ocurra. Quizás lo hace porque tiene rabo de paja. En alguna medida, en efecto, el gobierno tiene responsabilidad en tales desbordes populares. Las protestas populares de Arequipa en el año 2004, por ejemplo, se dieron en parte porque el candidato a la Presidencia de la República Alejandro Toledo prometió, en las campañas electorales de 2000 y 2001, no privatizar las empresas eléctricas. Igualmente, las protestas populares en Cajamarca este año se han dado en alguna medida provocadas porque el candidato Ollanta Humala, durante las campañas electorales de 2006 y 2011, dijo “agua sí, oro no”. Evidentemente, si los gobernantes cambian las opiniones que tenían como candidatos, deben explicarle claramente al pueblo porqué lo hacen. Lamentablemente, sus egos se suelen interponer en el camino, generando una reacción popular violenta.

4. El posible indulto al ex presidente Alberto Fujimori es un tema que está generando controversia últimamente. Jurídicamente, ¿qué se requiere para que proceda un indulto?

El inciso 21 del artículo 118 de la Constitución establece que “corresponde al Presidente de la República conceder indultos y conmutar penas”. No condiciona ni limita de forma alguna esta prerrogativa presidencial. Si alguna ley lo hace, sería a mi entender inconstitucional. Me parece, por tanto, que la única controversia que puede haber a este respecto es política, no jurídica. Aunque la mayoría de peruanos está a favor del indulto al ex-Presidente Alberto Fujimori, hay también quienes no lo están. Mi opinión personal es en favor del indulto, puesto que considero que la pena no estuvo debidamente ponderada. Por ejemplo, no puede achacársele responsabilidad a Fujimori por el crimen de Barrios Altos de 1991, partiendo del golpe de Estado que dio en 1992. La secuencia en que se dieron esos hechos evidencia que el Grupo Colina actuó por sí y ante sí en ese crimen y, seguramente, también en el de La Cantuta. En la sentencia condenatoria a Fujimori hubo mucho de apasionamiento y de venganza no sólo por el cierre del Congreso y la reforma judicial sino también por la reforma estructural de la economía que emprendió su gobierno.

5. Actualmente el boom de las redes sociales permite a cualquier persona acceder a información de toda índole, ¿cuál es su opinión al respecto, en particular, sobre el derecho a la intimidad que se encuentra en juego?

Me parece que es muy difícil, acaso imposible, trazar líneas claras al respecto; fácilmente, podría estarse

violando el derecho a la libertad de expresión o de opinión. Más que tratar de protegerse a través de regulaciones estatales, considero que debemos cuidar de comportarnos bajo estándares exigentes, de forma tal que no nos avergüence la eventual exposición pública de nuestra conducta. Esto es así, sobre todo, para quienes desempeñan cargos públicos.

6. ¿Somos testigos de una imparable proliferación de universidades, muchas de ellas con facultades de derecho que no cuentan con las condiciones básicas para la enseñanza. ¿qué debe hacer el Estado al respecto?

La competencia se encargará, más temprano que tarde, de poner al descubierto a las instituciones educativas que no prestan sus servicios adecuadamente. Si, por impaciencia, se pretende que el Estado intervenga en el mercado de la educación

legal superior, se tendrán consecuencias lamentables. En realidad, la enseñanza del Derecho —junto con la de Medicina y Educación— está incluida entre las excepciones a la regla de la acreditación voluntaria. En el Perú, la acreditación de las Facultades de Derecho ya es obligatoria. Sin embargo, si se revisan los borradores de documentos que ha preparado el Sineace-Coneau al respecto, estableciendo los estándares que serán objeto de los procesos de acreditación, se verá que éstos están muy mal pensados y encaminados, mal disimuladamente, a estrangular la iniciativa privada. Me temo, pues, que la acreditación forzosa, sujeta a las definiciones de este organismo, pueda terminar convirtiéndose en una coartada para la intervención política en la educación. Me parece que es preferible apostar a que la regulación se dé a través de la competencia, puesto que no hay decisión familiar más pensada que la de a qué institución educativa enviar a los hijos a realizar sus estudios universitarios. »

1. We would like to begin this interview by discussing the current political situation in Peru. What should be done to trust or believe again in politicians?

To build trust, election campaign promises must be fulfilled or, otherwise, good results must be obtained. In Peru, the problem is as follows: if politicians fulfilled their election campaign promises, then they would not obtain any good results. To obtain good results, politicians cannot fulfill the demagogic promises they made during the election campaign. Therefore, although politicians build trust when they obtain good results, they lose it when the electorate realizes that they have failed to meet their promises. How can politicians build trust by obtaining good results and, at the same time, by meeting their election campaign promises? Obviously, the only way is by making serious public policy promises, not demagogic promises. However, politicians will never make serious public policy promises if citizens do not value these promises which are consistent with economic development. To overcome the current situation, the most important thing to do is to educate citizens by teaching them how the economy works. The task is difficult, but not impossible.

2. As a political science scholar, do you think that Peru's political model should be changed?

I believe that the government system needs to be changed.

In fact, Peru's government system should prevent the President from suspending Congress and should also prevent Congress from censuring the ministers. The idea is to perfect the system of checks and balances. This system may require some additional adjustments like, for instance, modifying the national electoral calendar, in such a way so as to partially renew Congress when the President is halfway through his term in office. In this way, people could have a casting vote to resolve ongoing conflicts between the Executive and the Legislature. In addition, the current system of proportional representation whereby seats are assigned in Congress should be replaced by a majority representation system based on the election of members of Congress in uninominal circumscriptions. This electoral reform would facilitate checks and balances as it would result in the establishment of two large political parties. At the same time, this electoral reform would have an important impact, like allowing members of Congress to get closer to citizens. This closeness could result in less corruption, less public spending, and less taxes.

3. Concerning the violence triggered by protests lately, how should the right to protest be regulated and controlled without affecting other fundamental rights of the individual, like the right to freedom, the right to ownership, etc.?

There is no right to protest per se. In any event, what we



Dr. José Luis Sardón
Dean of the Faculty of Law
of the Universidad de Ciencias Aplicadas - UPC

do have is the right to freedom of speech, but this right cannot be exercised by affecting life, freedom, or the ownership rights of third parties. The government should not allow this to occur. Maybe it does it because it has a straw tail. In fact, the government is to some extent responsible for popular unrest. For instance, the strong protests staged in Arequipa in 2004 were due, in part, to Alejandro Toledo's 2000-2001 election pledges, as he then promised people in Arequipa that he would not privatize electricity companies. Moreover, the strong protests staged this year in Cajamarca have been in part triggered by Ollanta Humala's 2006 and 2011 election pledges, as he promised people in Cajamarca that he would "support water, not gold". Obviously, if presidents change their mind, they should clearly explain why. Unfortunately, their ego gets in the way, generating a violent popular reaction.

4. The pardon that President Humala could possibly grant to former president Alberto Fujimori has sparked much controversy lately. Legally speaking, what is needed to grant presidential pardon?

Item 21 of Article 118 of the Constitution provides that "the President of the Republic has the power to grant pardons and commute penalties". It does not condition or limit in any way whatsoever this right. If any law actually did it, said law would be, in my opinion, unconstitutional. Therefore, I believe that the only controversy that the case could spark should be political, not legal. Although most people in Peru agree that President Humala should grant former President Alberto

Fujimori presidential pardon, some people oppose the presidential pardon. Personally, I believe that former President Fujimori should be granted a presidential pardon because his penalty was not properly assessed. For instance, Fujimori cannot be held responsible for the crimes occurred at Barrios Altos in 1991, based on the coup d'état he led in 1992. The sequence of events shows that the Colina Group acted on its own, and the same occurred at La Cantuta. There was too much passion and a spirit of revenge in the resolutions that sentenced Fujimori for these crimes, not only because of his decision to close Congress and undertake a judicial reform, but also because of the structural economic reform that his administration undertook.

5. With the current boom of social media, anyone can gain access to any kind of information. What is your opinion about the right to intimacy that is at stake?

I think that it is very difficult, or maybe impossible, to draw clear lines regarding this topic, as we could easily infringe the right to freedom of speech or opinion. More than trying to protect ourselves through State regulations, we should try to follow stringent standards in our everyday life in order not to feel ashamed of ourselves if our lives become publicly exposed. This statement is particularly applicable to those who hold public office.

6. We are witnessing the unstoppable proliferation of universities, many of which have schools of law that do not even meet the most basic teaching requirements. What should the State do in this regard?

Sooner or later, competition will show that universities are not providing good education. If, acting impatiently, we try to have the State intervene in the higher legal education market, there will be some regrettable consequences. The truth is that Law –along with Medicine and Education– are some of the exceptions to the rule of voluntary accreditation. In Peru, accreditation is already compulsory in law schools. However, if we take a look at the draft documents prepared by Sineace-Coneau, establishing the standards to be fulfilled in accreditation processes, we will see that they have been poorly thought out and misdirected to choke off private initiative. Therefore, I am afraid that mandatory accreditation, subject to the decisions of this entity, could end up becoming an alibi for politicians to intervene in education. I believe the best option we have to regulate education is to bet on competition because choosing the right university for our child is one of the most well thought-out family decisions.))